



Nº 33 JUNIO 2016 PRECIO 1€ (PRECIO DE AYUDA DE 2€)

LUCHA DE CLASES

REVISTA DE LA CORRIENTE LUCHA DE CLASES - CORRIENTE MARXISTA INTERNACIONAL

www.luchadeclases.org

LA IZQUIERDA AL GOBIERNO, EL PUEBLO AL PODER



¡La izquierda al gobierno, el pueblo al poder!

Las elecciones del 26 de junio tienen una trascendencia histórica. Por primera vez en el Estado español, una fuerza de izquierdas opuesta al viejo régimen y a sus políticas de recortes sociales, explotación y represión, puede alzarse con la victoria y formar gobierno.

No es casual que las clases acomodadas hayan mostrado su preocupación con la formación de UNIDOS PODEMOS (UP) —la coalición electoral de PODEMOS e Izquierda Unida— y sus confluencias en Catalunya, Galicia, País Valenciano y Baleares. Esta confluencia ha generado tal entusiasmo popular que todas las encuestas publicadas la sitúan en una sólida segunda posición, por delante del PSOE, y acercándose al PP.

Lucha de clases En estas elecciones se libra una lucha de clases sin cuartel. En medio de la mayor crisis económica y social de nuestra historia reciente, los ricos nos han hecho pagar la continuidad de sus privilegios, amasados con la explotación de los trabajadores y el saqueo del Estado. Tenemos menos empleo y más precario, salarios más bajos, peores servicios sociales, tasas universitarias imposibles de pagar, y una represión social creciente con multas y cárcel. Los grandes empresarios han acumulado fortunas, pagando impuestos mínimos y evadiendo sus capitales a paraísos fiscales. La voz de orden, proveniente de Bruselas, es que el próximo gobierno deberá acometer nuevos ajustes del gasto público de 8.000 millones de euros, mientras seguimos pagando una deuda pública ilegítima y criminal que devora anualmente 34.000 millones de euros. Esto equivale a todo lo recortado en sanidad y educación desde 2009 ¡cada año!

Pese a toda la alharaca sobre la recuperación, todavía no se ha alcanzado el nivel de producción de 2007 ¡hace 9 años!; mientras se desperdician 4,5 millones de personas/año en el des-

empleo que podrían crear un 25% más de riqueza si tuvieran trabajo. La brecha de ingresos se ha disparado. Los sueldos de los altos directivos de las grandes empresas aumentaron desde 2012 un 21,6%, hasta los 576.325 euros anuales de media, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cambio, el sueldo medio bruto mensual de los trabajadores creció un mero 1,4%, hasta los 1.640 euros, según el INE. Los salarios han perdido un 4,5% de poder adquisitivo, según la EPA, 912 euros anuales. Más de un tercio de la fuerza laboral, un 34,5%, tiene empleo precario, temporal o a tiempo parcial, con millones de horas extras sin pagar.

El futuro contra el pasado

En estas elecciones estamos, de un lado, millones de trabajadores, jóvenes, mujeres oprimidas y desempleados, y la clase media empobrecida. Representamos todo lo que hay de vibrante y progresista en la sociedad. Del otro lado, están las 200 familias de

la oligarquía española, con su Partido “Popular”, que representan la injusticia, la corrupción y el sufrimiento que padecemos. Disponen también de las muletas de Ciudadanos y de sus agentes en la dirección del PSOE, que han purgado el partido de cualquier traza de izquierdismo durante décadas. Todos ellos están compitiendo entre sí en una histeria “anticomunista” contra UP. Es una lucha entre la esperanza y el miedo, entre lo vivo y lo muerto, entre el futuro y el pasado.

El gran recibimiento popular al acuerdo PODEMOS-IU demuestra que debía haberse alcanzado ya para las elecciones del 20D. Ahora, UP estaría en una situación mucho mejor para derrotar al PP el 26J. Los prejuicios anteriores de los compañeros de la dirección de PODEMOS contra la “izquierda” se han demostrado profundamente equivocados. Pese a toda la histeria “anticomunista” de la reacción, la expectativa de voto de UP no hace más que crecer. A la “gente” no le asusta la etiqueta de “izquierdas”.

Lo que le frustra es la falta de valentía y audacia en la izquierda para defender un verdadero programa de transformación social y desafiar a la reacción. Felicitamos ahora a los compañeros dirigentes de PODEMOS por haber enmendado su error. A eso también ayudó que el compañero Alberto Garzón forzara la depuración del sector más anquilosado y burocrático de IU, renuente a pactar con PODEMOS, y le imprimiera un giro a la izquierda a la organización.

¿Sería posible un gobierno UP-PSOE?

La clase dominante apuesta por un gobierno PP-Ciudadanos con apoyo exterior del PSOE. Albert Rivera, lo dejó claro hace unas semanas: “Si Ciudadanos es decisivo, habrá gobierno”. Ciertamente es que tal disposición a apoyar al PP sería más entusiasta sin la presencia de Rajoy, para no cargar con el lastre de la desprestigiada dirección actual del PP ¿Qué hará el PSOE? Lo más probable es que los dirigentes socialistas apoyen pasivamente (absteniéndose) la investidura de tal gobierno, negándose a confluír en un gobierno con UP. Pero si así lo hicieran, prepararían su derrumbe, siguiendo la estela decadente del PASOK griego.

Por su parte, los compañeros dirigentes de UP apuestan a que el PSOE sea nuestro aliado en un gobierno

“progresista”. Somos muy escépticos con esa posibilidad, dada la resistencia de la dirección socialista a compartir gobierno con nosotros, por sus vínculos con el viejo régimen. Pero si se diera, deberíamos resistir cualquier pretensión de su parte de rebajar nuestro programa de gobierno. Las 50 medidas presentadas por UP son imprescindibles para terminar con la austeridad, revertir los ataques sociales del PP y mejorar las condiciones de vida de las familias obreras. No podemos frustrar las expectativas de cambio que hemos generado. En tal caso sería preferible que UP, siendo la principal fuerza de izquierdas, gobernara en solitario —como en los Ayuntamientos del Cambio— apelando a la movilización popular en la calle para obligar al PSOE a invertir nuestro gobierno. Si éste se negara, quedaría en evidencia, preparando un avance mayor de UP en unas futuras elecciones, que no tardarían en llegar ante la impopularidad de un gobierno PP-Ciudadanos.

El poder para el pueblo

Aunque consigamos encabezar un gobierno del pueblo después del 26J, debemos tener claro que disponer del gobierno no significa disponer del poder. Éste seguiría en manos del gran capital, de los tiburones del IBEX 35 y de sus agentes en el aparato del Estado. Desde el primer día, comenzarían a conspirar contra un gobierno de UP, como vimos en el caso de Syriza en Grecia, para obligarlo a retroceder y ponerlo de rodillas. Por eso, el objetivo de un gobierno de UP debe ser preparar las condiciones para terminar con la dictadura del gran capital, para que sea el pueblo quien asuma el poder. La condición básica es nacionalizar las 100 grandes empresas y bancos que controlan el 80% de la economía española, comenzando por las empresas del IBEX 35, bajo el control de los trabajadores, indemnizando a los pequeños accionistas y ahorradores. Así podríamos disponer de los instrumentos y recursos necesarios para planificar la economía y atender las necesidades sociales, reducir la semana laboral a 35 horas y dar empleo a los parados, revertir los recortes sociales aplicados, y poner fin al pago de una deuda pública monstruosa generada por los ricos,

garantizando solamente los bonos de los pequeños ahorradores.

Para dar cauce a la participación obrera y popular, y enfrentarnos a cualquier boicot, deberían formarse comités de trabajadores que fiscalizaran la producción y los balances en las empresas; y comités vecinales en los barrios que suplieran las insuficiencias de la burocracia estatal y municipal en las ciudades y pueblos.

Para democratizar el aparato del Estado, habría que formar comités en la Guardia Civil, la policía y el ejército, donde los soldados y escalafones inferiores eligieran a sus mandos y los depuraran de fascistas y reaccionarios, con la participación de las organizaciones populares. Para democratizar el corrupto aparato judicial, habría que instituir, como primera medida, la elección popular de los jueces.

Hacia un Proceso Constituyente

Esto prepararía las condiciones para iniciar un verdadero Proceso Constituyente que creara nuevas instituciones representativas nacidas desde abajo, una vez constatado un apoyo mayoritario a nuestra acción de gobierno.

La forma más democrática de hacerlo sería a través de los comités obreros y populares mencionados, en las empresas y barrios, que deberían elegir delegados revocables en cualquier momento, para organizar un Congreso del Pueblo, con la participación de organizaciones y movimientos sociales, sindicales, profesionales, juveniles y de izquierdas. Su función sería debatir y proponer al conjunto de la población la forma del futuro Estado y gobierno. Los marxistas proponemos una República Socialista Federal que incluya el derecho de autodeterminación para Catalunya, Galicia y Euskadi, para constituir una unión voluntaria de los pueblos que componen el Estado español.

Esta es la perspectiva para la que debemos prepararnos para los próximos años: un gobierno de izquierdas, con el pueblo ejerciendo realmente el poder, libres de la presión asfixiante de una oligarquía parásita y de sus agentes en el aparato del Estado. Una victoria de UNIDOS PODEMOS el 26J, aun sin mayoría absoluta, sería un avance sustancial hacia ese objetivo ¡Adelante, hagámosla posible! ▣



El programa de Unidos Podemos Debemos completarlo con medidas socialistas

Miguel Jiménez *Miembro del círculo sectorial Podemos Socialismo*

Unidos Podemos (UP) ha presentado su programa de gobierno, denominado “50 pasos para gobernar juntos”.

En primer lugar destacan como elementos muy positivos la derogación de las leyes más reaccionarias aprobadas por los gobiernos del PP y el PSOE en los últimos años, como son entre otros casos: la Ley Mordaza; las reformas laborales y de pensiones del PP y del PSOE; la ley educativa LOMCE; la ley Montoro, que recorta las prestaciones de la administración local; o el artículo 135 de la Constitución, que privilegia el gasto de la deuda por encima del gasto social. Pasamos a examinar los “50 pasos” en base a los diferentes apartados del documento.

Apartado de democracia política Lo más significativo es el punto 27, denominado “cambio constitucional”, donde se expone “la apertura de un debate ciudadano orientado a discutir el inicio de un proceso de cambio constitucional capaz de modificar los marcos económico, social, político, territorial e institucional definidos en el texto de 1978”. Asimismo, se defiende la celebración de un referéndum consultivo para iniciar este proceso. Estamos de acuerdo con esto, pero creemos que hay que defender de forma explícita la superación de la caduca Monarquía.

También supone un gran paso adelante la posibilidad de establecer un proceso de revocación ciudadana en el conjunto de las administraciones públicas sobre los cargos electos, superados los dos años de mandato.

Se defiende “el derecho a decidir”. Cualquier gobierno autonómico podrá celebrar una consulta en ese sentido.

UP lo impulsará en el caso de Catalunya.

Se propone acabar con los privilegios de los cargos electos, bajar los salarios de diputados y cargos públicos, así como impedir su acceso posterior a empresas de los sectores estratégicos.

El apartado social Se mantiene que el gasto educativo pase del 4,0% del PIB al 6,2% al final de la legislatura. En Sanidad se pasaría del 6,2% al 6,8%.

Se crearía un programa de Renta Garantizada para todos los hogares por debajo del umbral de pobreza, que recibirían entre 600 y 1290 euros en función de su número de miembros. Igualmente, se defiende el suministro básico de luz y agua para todos los habitantes sin excepción.

Aquellos hogares que presenten ingresos 3 veces inferiores al índice de referencia para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos familiares (IPREM), o cuyos miembros estén todos en desempleo, se verán beneficiados de una reducción de su deuda hipotecaria nominal.

El gasto en atención a la Dependencia se elevaría a los niveles existentes antes de 2012.

Se paralizarían todos los desahucios por motivos económicos. Se fomentará el alquiler social, cuyo tope se establezca en un 30% de la renta familiar, incluidos los gastos de suministros. Entendemos que con centenares de miles de viviendas vacías existentes en este país, es posible poner estas viviendas al servicio de las familias necesitadas con alquileres que no superasen el 10% de sus ingresos, para permitirles alcanzar una mayor dignidad vital.

Al Medio Ambiente se le dedican 9 de las 50 medidas, donde se propone

una batería de futuras leyes y la creación de diversos programas tendentes a mejorar la situación actual. Se plantea avanzar drásticamente en el uso de las energías menos contaminantes, cerrando inmediatamente la central nuclear de Santa María de Garoña y el resto de nucleares en 2024.

El apartado económico Se defiende que el SMI pase a 800 euros en 2017, en 14 pagas, para llegar a 900 euros en 2019. Se limitará drásticamente el empleo eventual, del que existirá una única clase de contrato, que no podrá ser superior a un año ni encadenarse sucesivamente. Se favorece la total reversión de las relaciones laborales en favor de la clase trabajadora, que volvería a disfrutar de derechos similares a los existentes al final de la Transición.

El objetivo básico de este apartado consiste en recaudar 3 puntos más del PIB en base a: subir la aportación en el IRPF de las rentas más altas, eliminar deducciones en el impuesto de sociedades, junto con un nuevo impuesto a la banca. Se bajará el IVA de productos y suministros básicos, que afectan a la inmensa mayoría de la población.

Mientras el PP propone bajar el gasto público hasta el 40,1% del PIB en 2019, UP mantendrá el gasto público en el 43,3% del PIB, cambiando sus distribución para subir manera significativa el gasto en educación, sanidad, medio ambiente, vivienda o cultura.

Los tres puntos extras logrados a través de los impuestos irán destinados a disminuir el déficit actual, cuyo ritmo de reducción se pretende renegociar con la Comisión Europea.

Un aspecto débil del programa es

que no se dice una palabra acerca de los 33.490 millones de euros de pago de intereses de la Deuda del Estado a los bancos usureros presupuestados para el 2016. Nosotros rechazamos el pago de esta deuda usurera impuesta a la población – salvo los bonos poseídos por los pequeños ahorradores– que nos priva de recursos vitales para desarrollar las medidas enunciadas en este programa.

UP defiende crear una banca pública, uniendo al ICO las cajas nacionalizadas, Bankia y Mare Nostrum. Creemos que esto es insuficiente. Los bancos han estado sostenidos por el Estado y el Banco Central Europeo (BCE) con todo tipo de ayudas directas e indirectas. La inmensa mayoría de la sociedad entendería perfectamente que el Estado nacionalizara la banca, indemnizando a los pequeños accionistas de los mismos.

Apartado internacional Es muy positivo el rechazo al tratado comercial TTIP, así como al homólogo CETA que vincula las relaciones comerciales con Canadá, que atentan contra conquistas sociales básicas.

Se defiende el cese de las devoluciones de inmigrantes, el cierre de los Centros de Internamiento de Emigrantes, el reforzamiento del derecho de

asilo, así como favorecer la reunificación familiar de los inmigrantes.

Se propone un plan para favorecer con medidas materiales (acceso a vivienda y subsidio de desempleo) el retorno de emigrantes.

Destaca el apartado dedicado a la política europea. Se propone aquí la democratización del BCE y una reforma del Pacto de estabilidad para eliminar el objetivo de déficit.

Se abandera solucionar el problema de la Deuda Pública europea, facilitando que el BCE compre a su valor nominal los actuales títulos de la misma, para intercambiar posteriormente los actuales títulos por otros nuevos a un tipo de interés del 0% y ampliando sus plazos de vencimiento. Posteriormente, el BCE debería reestructurar (es decir, perdonar total o parcialmente) toda la deuda Pública que supere el 60% de cada país, lo que entra en evidente contradicción con los intereses del capital financiero internacional.

Defender una alternativa socialista Más allá de tal o cual diferencia, respaldamos las reformas que enuncia el programa de los “50 pasos” de UP. La cuestión es que su puesta en práctica choca radicalmente con la realidad de las medidas que los poderosos impusieron en los últimos ocho años

en nuestro país. Ellos jamás aceptarán la puesta en marcha de estas medidas.

Tal como explicamos en la Editorial de forma concreta, un gobierno que defiende los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad debe de explicar desde el minuto 1 de su toma de posesión, con ejemplos concretos, cómo no podrá aplicar sus promesas si no controla las palancas fundamentales de la economía. Nosotros no proponemos nacionalizar las pequeñas empresas. Sólo planteamos nacionalizar las grandes empresas que controlan el 80% de la economía española. Al contrario, pretendemos apoyar las pequeñas empresas, reduciendo al mínimo los intereses gravosos que ahora pagan a los bancos. Para ellos necesitamos controlar los bancos.

Las regiones donde la derecha es más fuerte socialmente es donde el peso de la pequeña propiedad (fundamentalmente agraria) es mayor. El gobierno de UP puede proporcionarles a los pequeños propietarios agrícolas seguros agrícolas gratis (el 50% de ellos carece de los mismos), pero sólo si controlamos las empresas aseguradoras. Igualmente, podemos proporcionarles abonos mucho más baratos, pero sólo si controlamos las principales empresas químicas.

A transportistas autónomos, a pescadores..., podemos proporcionarles carburante a un precio más ventajoso. Pero necesitamos controlar las principales empresas de combustibles.

Si, como vimos en Grecia hace un año, los principales capitalistas evaden el dinero o realizan huelga de inversiones, el gobierno debe intervenirlos y poner sus recursos al servicio del bien común.

Un gobierno que controle las principales palancas de la economía sí podrá fijarse como meta realista acabar totalmente con el desempleo en pocos años, reduciendo la jornada laboral a 35 horas y repartiendo el trabajo, haciendo crecer la economía independientemente del boicot a la misma por parte del capital nacional e internacional.

En definitiva, la mejor baza de apoyo del gobierno de UP debe ser la realización efectiva de sus promesas, soldando e incrementando su base de apoyo. Pero sólo con medidas socialistas se podrían llevar a cabo íntegramente.



Medios de comunicación “El gran problema de la prensa española es la verdad”

Javier Cabrera

Un informe del Reuters Institute de septiembre de 2015, señala que los medios de comunicación españoles tienen la credibilidad más baja de toda Europa, con sólo un 34% de aprobación. Este dato se entiende mejor si se acompaña del que señala que España es el país que muestra un mayor interés por la información, con un 85%. Ambos datos señalan uno de los factores centrales de la actual crisis política, en la que una población con un mayor interés por la política y la información se enfrenta a unos medios de comunicación de masas cuyos intereses están lejos de la verdad, la objetividad y de los intereses de la mayoría.

“Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta.” Rafael Correa.

Los medios de comunicación de masas son una fuerza colosal que la oligarquía y sus representantes políticos siempre van a querer tener bajo control. Por eso, que una mayoría de españoles desconfíe así de ellos es un poderoso indicativo de la etapa política en la que estamos. Sin duda, la campaña inmisericorde contra PODEMOS y los demás partidos y colectivos de la izquierda tiene mucho que ver con esta percepción; pero lo fundamental es que, desde la sacudida de la crisis y, sobre todo, desde el estallido del 15M, la clase trabajadora, la mayoría social, ha aprendido a cuestionarse todo lo que oye y ve, consciente de los intereses que hay detrás.

La información está monopolizada por un puñado de capitalistas que sólo se representan a sí mismos. Entre los apellidos que controlan los principales medios de comunicación, como



los Lara o los Cebrián, descubrimos a la vieja oligarquía que medró con el franquismo, exactamente igual que en el resto de sectores de la economía. Cualquier denuncia del monopolio de esta oligarquía sobre la información y cualquier intento de regularla como un derecho y de darle acceso a la misma a las clases populares, era (y es) caracterizado como un ataque a la libertad de prensa.

En verdad, lo que amenaza la libertad de prensa es la propiedad privada de los medios de comunicación y la subordinación de los medios públicos a los intereses privados. La crisis económica ha acelerado la concentración de medios en el Estado español. La crisis económica y dicha concentración han provocado una precarización absoluta del oficio periodístico, lo que se traduce en una mayor sumisión a los intereses corporativos y políticos. Esto se ha revelado de forma cruda con la presunta implicación del consejero delegado de PRISA, Juan Luís Cebrián, en un entramado societario “offshore”. Por supuesto los medios de PRISA no informaron sobre este tema, y el grupo prescindió rápidamente de los colaboradores externos cuyos medios habían publicado dicha información.

El complemento perfecto de los medios privados son unos medios públicos totalmente subalternos, cerrados a la participación de la ciudadanía, utilizados como correa de transmisión de los gobiernos central y autonómicos, con RTVE y Telemadrid como ejemplos supremos de manipulación informativa y de saqueo de lo público, firmando contratos millonarios con periodistas de ultraderecha mientras despedían a miles de trabajadores.

La información es un derecho y, como tal, no puede depender de los intereses del capital privado. Un gobierno de la izquierda que lleve a cabo una verdadera política socialista de comunicación, puede y debe poner a disposición de las organizaciones sociales, sindicales y políticas representativas de la clase los recursos técnicos para producir televisión, radio y prensa escrita que ahora están monopolizados por la burguesía. Al mismo tiempo, ese gobierno puede y debe construir unos medios de comunicación públicos verdaderamente públicos, libres censura y manipulación y abiertos a la ciudadanía y sus organizaciones. Esto puede y debe ir acompañado de la nacionalización de las grandes empresas de comunicación bajo el control de sus trabajadores, para que estos decidan democráticamente su línea editorial y sus contenidos, sin censuras ni vetos, para que no respondan a más intereses que a los de la objetividad y la calidad periodística.

La clase trabajadora es la más interesada en que exista la máxima libertad de expresión. No queremos censurar ni perseguir a Inda o a Marhuenda, simplemente queremos para todos la libertad de expresión de la que hoy gozan sólo unos pocos.

Claveles rojos para un adiós. A 40 años de los sucesos de Montejurra

Tito Martínez Concejal de Ahora-Orain Estella-Lizarra y miembro de IU

Te das cuenta, compañero, que hace muchos años que nos esconden la historia y nos dicen que no la tenemos; que la nuestra es la de ellos, te das cuenta, amigo Raimon “Tadones, company”

Estella-Lizarra, emblema del carlismo, es una ciudad de Navarra que no alcanza los 14 mil habitantes. Lo que aquí sucedió a partir de 1976, es muy ilustrativo de lo que fue la llamada Transición.

En enero de 1976, dos meses después de la muerte del dictador Franco, los más de 500 trabajadores de la empresa de artes gráficas SALVAT se declaran en huelga por reivindicaciones laborales. Desalojados de la empresa, se encierran en la parroquia de San Juan. La solidaridad es inmediata desde otras fábricas, jóvenes y estudiantes, comerciantes, asociaciones... Empujadas y animadas, las luchas de otros sectores toman el relevo. Las demandas laborales se funden con las consignas políticas: libertad, amnistía, autonomía, derechos democráticos...

El 9 de mayo de 1976 se celebra el día de los carlistas, con la subida a Montejurra, a tres kilómetros de Estella-Lizarra, monte símbolo del carlismo. Este partido, de ser pilar del golpe militar del 36 (los requetés), evoluciona desde fines de los 60 a lo que llaman “socialismo autogestionario”. Romería-viacrucis, que con un acto político posterior era un espacio tolerado de crítica al régimen, a la que asisten gentes de la zona y de otras sensibilidades políticas y sociales de izquierdas y nacionalistas.

La inquietud estuvo presente durante la semana anterior en Estella-Lizarra. Miembros de grupos fascistas internacionales ocupaban el hotel Irache, en las faldas de Montejurra. El

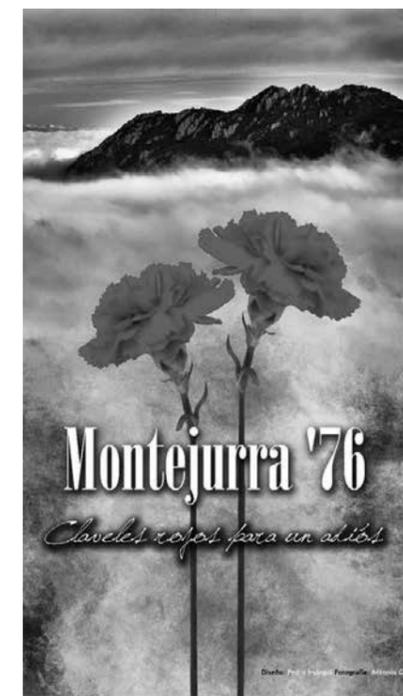
día 9, un fuego de ametralladora en la cumbre mata al joven obrero estellés Ricardo García Pellejero. Por fuego de pistola, junto al monasterio de Irache, muere días más tarde Aniano Jiménez, carlista santanderino. Además, hay varios heridos por arma de fuego. Todo ello, con el conocimiento y al menos la pasividad de las llamadas fuerzas de orden público. El día del funeral no se puede entrar en la ciudad, está cerrada por los controles policiales. Todo se explica por disputas entre las familias carlistas, entre Carlos Hugo y Sixto. Y después, IMPUNIDAD.

Estella-Lizarra vivió en 6 meses lo que en años. Ahora-Orain, agrupación electoral formada por miembros de IU, Podemos e independientes, con tres concejales, hemos querido hacer un ejercicio de memoria histórica, reconociendo en la persona de Ricardo y de su familia, a las 123 víctimas que fueron asesinadas desde el 76 al

80. Recordar que la transición no fue pacífica, ni modélica, ni sin traumas. Denunciar los pactos vergonzosos que convirtieron a las víctimas en incómodas y al movimiento obrero en un obstáculo para sus planes. Regresar a las asambleas, a las calles y plazas abarrotadas por las y los auténticos protagonistas de esta historia: la clase obrera, la juventud, “los de abajo”. Lo hemos hecho con un documental que recoge testimonios de activistas políticos, sindicales y juveniles, testigos presenciales y familiares de Ricardo. “Claveles rojos para un adiós”, título de una canción en recuerdo de Ricardo, claveles rojos con los que los vecinos y vecinas de Estella-Lizarra le despidieron.

La respuesta ha sido maravillosa. En la sesión de estreno, el viernes 6 de mayo, 560 personas hacen colgar el cartel de “no hay billetes”, de manera que tenemos que programar otra sesión, a la que asisten 360 personas. Queremos recordar, queremos saber, y hacer útil la frase con la que Ronald Fraser titula los dos tomos de su historia oral de la guerra civil española: “Recuérdalo tú y recuérdalo a otros”.

Sin conocer y aprender de lo que pasó en aquellos años, no podemos entender lo que hoy estamos viviendo. Cuarenta años después seguimos reivindicando la república, el derecho a decidir, una ley electoral justa, la laicidad, la no privatización de los servicios básicos y su gestión desde lo público, banca pública, democracia real... y tantas y tantas cosas que se dejaron pasar y otras que nos las metieron... Cualquier paso adelante será con solidaridad y lucha, y provocará la reacción histórica y el enfrentamiento con los poderes económicos y las derechas, tal y como lo demuestra la experiencia de los gobiernos del cambio, o la confluencia electoral de IU y Podemos. Pero ese es el camino.



¿Cómo podemos hacer la revolución? El Plan B y las lecciones de Grecia

David Rey

A iniciativa del ex-ministro de economía griego, Yanis Varoufakis, se está impulsando la formación de un movimiento político en Europa contra las políticas de austeridad de la Unión Europea. Esta iniciativa está respaldada por organizaciones de la izquierda europea y española, como PODEMOS e Izquierda Unida.

El Plan B Este movimiento ha tomado el nombre de “Plan B contra la austeridad, por una Europa democrática”, como una alternativa al que denominan Plan A de la austeridad que impulsa Bruselas.

Desde *Lucha de Clases* damos la bienvenida a toda iniciativa que ayude a fortalecer la dimensión continental a la lucha contra los intentos de los ricos y sus gobiernos de hacernos pagar la crisis capitalista global.

En el manifiesto fundacional del Plan B se denuncia el “Golpe de Estado financiero desde la Unión Europea y sus Instituciones contra el Gobierno griego, que condena a la población griega a seguir sufriendo las políticas de austeridad que ya había rechazado en dos ocasiones a través de las urnas”.

En los materiales publicados por el Plan B se afirma que la crisis económica iniciada en 2008 “fue la excusa perfecta” para imponer las políticas antisociales de ajuste y austeridad. Nosotros discrepamos de esta tesis. La crisis económica es una realidad que se concreta en millones de empleos destruidos y miles de empresas desaparecidas. Se concreta en una disminución de los ingresos estatales y en el rescate de cientos de empresas y bancos a cuenta del erario público, que disparó la deuda pública en todas partes. La

crisis se expresa en una reducción del mercado por la menor capacidad de consumo de la sociedad y en una sobrecapacidad productiva incapaz de dar salida a toda la producción que le es inherente. La crisis es demasiado profunda como para que la burguesía pueda permitirse el mantenimiento de las viejas conquistas, sin perspectiva de un auge económico global a la vista. Los ataques sociales de los gobiernos, auspiciados por los bancos y grandes empresas, no son de carácter “ideológico”, sino una necesidad de la clase capitalista para tratar de salir de la crisis depositando sobre las espaldas

de millones de familias trabajadoras el coste de la misma.

Las organizaciones que impulsan el “Plan B” plantean que tienen muchas propuestas en marcha para acabar con la austeridad. Así, hablan de: una política fiscal justa y el cierre de paraísos fiscales, sistemas de intercambio complementarios, la remunicipalización de los servicios públicos, el reparto igualitario de todos los trabajos en condiciones de dignidad, la apuesta por un modelo de producción basado en las energías renovables, y reformar o abolir el pacto fiscal europeo que consagra el cumplimiento estricto de los obje-

tivos de déficit público para cada país impuestos por Bruselas.

Por supuesto, estamos a favor de todo eso. Ahora bien, ¿cómo podría conseguirse? Los dirigentes de SYRIZA defendían las mismas cosas cuando ganaron las elecciones en enero de 2015, intentaron cumplirlas y no pudieron. El verdadero debate que el Plan B debería plantear es que podría haberse hecho si hubiéramos estado en el lugar de Tsipras. Pero no dan ninguna respuesta concreta a esto.

Lecciones de Grecia SYRIZA fue el primer partido político situado a la izquierda de la socialdemocracia en llegar al gobierno en Europa, desde los años 30.

Las primeras medidas anunciadas por Tsipras fueron, entre otras: paralizar y revertir las privatizaciones, subir el salario mínimo, terminar con los desahucios, recontratar a miles de empleados públicos despedidos, restablecer la negociación colectiva de los convenios de trabajo, y solicitar una reestructuración de la deuda externa a los acreedores. El apoyo a su gobierno en las encuestas superó el 80%. Así, la condición básica para llevar adelante un programa de reformas audaz, estaba asegurada, como era gozar de un sólido apoyo popular.

Tras meses de negociaciones, la Troika (el Banco Central Europeo, el FMI y la Unión Europea) declaró incompatible el programa electoral de SYRIZA con el pago de la deuda, estimada en 320.000 millones de euros, que casi duplicaba el valor de la producción anual del país, el PIB. La Troika también se negó a discutir una reestructuración que aliviara el peso de la deuda, amenazando a Grecia con expulsarla del euro si no aceptaba un nuevo plan de ajuste con más recortes para garantizar el pago de la misma.

El gobierno griego respondió con la convocatoria del referéndum del 5 de julio de 2015 para pedir el rechazo a las condiciones humillantes de un nuevo paquete de rescate. Acosado por una campaña criminal con todo tipo de amenazas y medidas de terror económico, el gobierno de Tsipras consiguió un apoyo insólito del 62%. Por si quedaba alguna duda, en la peor de las situaciones, el gobierno de Syriza tenía un apoyo aplastante de su pueblo. In-

sistimos, ¿cuánto más apoyo social necesitaba Tsipras para iniciar un cambio radical de modelo económico y social?

Para decepción de millones de personas en Grecia, Europa y todo el mundo, Tsipras claudicó ante la Troika una semana más tarde, aceptando un nuevo plan de “rescate” a cambio de medidas de ajuste mucho más duras que las que el pueblo había rechazado en el referéndum. Tsipras se justificó diciendo que la alternativa era la expulsión de Grecia del euro, que conduciría a una situación peor que la actual.

En el momento de la verdad, los dirigentes de Syriza demostraron no tener una alternativa para enfrentarse y doblegar a la Troika y a sus planes de ajuste.

La tragedia es que todos esos sacrificios –como los anteriores– serán en vano. Es sólo cuestión de tiempo que Grecia entre en bancarrota y Alemania decida dejar de prestarle más dinero. Por tanto, la salida de Grecia del euro sólo se ha retrasado y será inevitable de cualquier modo.

Syriza, que creció y se desarrolló precisamente denunciando los ajustes y proponiéndose como la herramienta para terminar con ellos, al final ha sido el instrumento para aplicar nuevas y más duras políticas de ajuste y austeridad.

La izquierda española ante la experiencia griega Todos los dirigentes de la izquierda europea y española, con mayor o menor énfasis, han justificado a Tsipras. Si bien reconocen que el acuerdo es malo, plantean que Tsipras no podía hacer otra cosa más que firmarlo.

Lo justifican diciendo que Grecia sólo representa el 2% de la economía de la UE y carece de músculo económico para imponerse a Alemania; y también que hay una correlación de fuerzas desfavorable en el conjunto de Europa, y que Grecia está sola frente a las “instituciones” europeas.

Al final, repiten los mismos argumentos de la socialdemocracia –el PASOK en Grecia, o el PSOE en España– cuando trata de convencer a las familias trabajadoras de que no hay alternativa al ajuste y a las políticas de austeridad.

Algunos compañeros dirigentes de PODEMOS e IU afirman enfáticamente

que “España no es Grecia”, porque supone el 12% de la economía de la UE y no podremos ser chantajeados tan fácilmente como los griegos para obligarnos a aplicar políticas de austeridad con un gobierno de UNIDOS PODEMOS, ya que una salida de España del euro provocaría un efecto desestabilizador en la economía europea. Estos compañeros parecen olvidar que el chantaje y el boicot económico contra una España que desafíe a la Troika y sus políticas de austeridad no vendrán sólo desde fuera ¿Acaso creen estos compañeros que la economía española estaría bajo el control de su gobierno? Nada de eso. Está firmemente en manos de la oligarquía española, en manos de las grandes empresas y bancos del IBEX35. Esta oligarquía parásita conspirará activamente, desde el primer día, contra un gobierno de la izquierda anti-austeridad. Recurrirá a la huelga de inversiones, a la fuga de divisas, a la escasez y la subida de precios, etc. Todo ello será reforzado con la presión exterior de amenazas y chantajes por parte de la Troika, hasta obligar al gobierno a ponerse de rodillas, como han hecho con Tsipras.

Se justifica a Tsipras por “la desfavorable correlación de fuerzas en las instituciones europeas”. Pero la política de Tsipras ha empeorado esa correlación de fuerzas.

Los marxistas proclamamos bien alto que sí existe una alternativa. Ahora bien, esa alternativa se sitúa fuera del capitalismo. Estamos completamente persuadidos de que tenemos la fuerza y el apoyo popular para llevar a la práctica esta alternativa, y las máximas garantías para vencer y abrir un nuevo período histórico en nuestros países, en Europa, y a nivel mundial.

La “correlación de fuerzas” y la “gente” El problema de la concepción reformista de la lucha de clases en la izquierda es que considera a la “gente” una mera receptora pasiva de sus propuestas. Para los marxistas, la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos, la sociedad por la que luchamos debe estar dirigida, gestionada y organizada por la “gente”, a través de organismos de poder obrero y popular.

Los reformistas cuando enfocan el problema de Grecia, sólo ven a la Troi-



ka y a la todopoderosa Alemania. Sólo ven gobiernos, parlamentos y medios de comunicación hostiles. Esa es la “correlación de fuerzas” que entra en sus cálculos políticos. Invariablemente, esa “correlación de fuerzas” siempre será desfavorable.

Sin embargo, a estos compañeros no se les ocurre mirar abajo, a los millones de trabajadores, jóvenes, desempleados, amas de casa, jubilados, profesionales e intelectuales progresistas, ¡las verdaderas fuerzas vitales de la sociedad! Son esos millones quienes votaron a Syriza y conformaron el 62% del NO en el referéndum del 5 de julio, los que llenaron las calles y las plazas, y lo que hacen que el país funcione cada día ¿No ha demostrado innumerables veces esta “gente” que está dispuesta a ir hasta el final para defender su futuro, el de sus hijos y el de su país? Esta “gente” también cuenta en la “correlación de fuerzas” Esta “gente” organizada y movilizada activamente en sus centros de trabajo, en sus barrios, y en la calle, sería una fuerza formidable a tener en cuenta. Más aún, ¿es que no había decenas de millones en toda Europa –incluso más allá– mirando con esperanza y entusiasmo a Grecia, dispuestos a movilizarse en sus ciudades y países para mostrar su apoyo al pueblo griego? ¿No son esas decenas de millones de “gentes” una fuerza formidable, una parte integrante fundamental de la “correlación de fuerzas” presente en Europa?

¿Qué debería haber hecho Tsipras? Entonces, ¿qué debería haber hecho Tsipras tras su contundente victoria en el referéndum del 5 de julio?

Tras conseguir el apoyo aplastante en el referéndum, Tsipras debía haber ido a la televisión, a decirle al pueblo, más o menos lo siguiente: nos elegisteis en enero, y lo habéis ratificado en este referéndum, para representar y defender vuestros intereses, y es lo que vamos a hacer. Renunciamos a las políticas de ajuste criminales y a seguir bajo el mandato de la Troika ¡No vamos a pagarles un solo euro a los ladrones que arruinaron al país! Vamos a cancelar y revertir inmediatamente todos los recortes, privatizaciones, despidos y otras contrarreformas que han sido infligidos a los trabajadores,

jóvenes y pensionistas de nuestro país. Para tomar el control de nuestra propia economía, vamos a expropiar los latifundios, los bancos y las grandes empresas sin ningún tipo de compensación, salvo a los pequeños accionistas y ahorradores. Vamos a introducir un plan de producción que movilice a los desempleados para construir casas, escuelas y hospitales, que la gente necesita. Vamos a introducir el monopolio estatal del comercio exterior y prohibir la exportación de capital, para que toda la riqueza producida esté bajo el control del pueblo e impedir la evasión de capitales y mercancías que necesitamos para levantar el país.

Seguidamente, debería haber planteado a los sindicatos y trabajadores que ocuparan las grandes fábricas, bancos y empresas, para evitar el robo de producción, maquinaria, documentación y dinero por parte de los antiguos patrones. Se debían haber convocado asambleas masivas de trabajadores en todas las empresas para elegir comités, revocables en cualquier momento, que tendrían funciones de control y fiscalización de la producción y de las cuentas.

En cada barrio y pueblo se podrían haber convocado asambleas vecinales para formar comités barriales, a fin de evaluar las necesidades populares en materia de vivienda, infraestructura, transporte, ocio, etc. y gestionarlos. Esto daría un cauce a la participación popular en el control y la gestión de sus asuntos, en colaboración estrecha con los ayuntamientos.

¿Quién se habría opuesto a esto? Por supuesto, las cientos de familias oligárquicas que dominan la economía del país, unas pocas decenas de miles de individuos de clase media alta que comen de las migajas que caen de los más ricos, los altos jefes militares y policiales, y la casta judicial y religiosa. Pero ¿qué fuerza representan todos ellos frente a millones de hombres y mujeres que sostienen la sociedad día a día con su trabajo y esfuerzo?

Las condiciones para llevar a cabo esta transformación de la sociedad de manera pacífica eran inmejorables. El aparato represivo hubiera sido impotente para reprimir a millones y se habría roto en pedazos.

Lo que se necesitaba, por tanto, era una acción de gobierno energética, com-



plementada con la movilización activa de la clase obrera y de la juventud en las empresas y en las calles.

¿Y si nos echan del euro?

Sin duda, los dirigentes de la derecha y de la socialdemocracia habrían tratado de asustar diciendo que si un gobierno de la izquierda en Grecia aplicara esa política, sería expulsado del euro y de la Unión Europea.

Lo cierto es que una economía donde el Estado controle la banca, la gran industria, el negocio naviero, las redes de transporte y comercialización, bajo el control democrático de los trabajadores, estaría en condiciones de resistir mucho mejor un período de acoso y aislamiento, que un gobierno burgués encerrado en los estrechos márgenes de una economía controlada por una oligarquía parásita y ladrona en bancarrota.

Pero esta reacción previsible de los gobiernos burgueses de Europa contra una Grecia socialista sería solamente una de las caras de la moneda. Una Grecia socialista despertaría inmediatamente la solidaridad de los trabaja-

dores y la juventud del resto de Europa con movilizaciones multitudinarias, que apuntarían también contra la clase dominante de sus propios países.

Una política internacionalista

Esta tendencia a la solidaridad de la clase obrera europea se habría reforzado con un llamamiento energético del gobierno de Tsipras para que apoyaran las medidas tomadas en Grecia y para animarla a que hiciera lo mismo en sus países. Tsipras y Syriza podrían haber convocado una gran conferencia internacional de solidaridad con el pueblo griego en Grecia, invitando a todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales de izquierda de Europa y a nivel internacional. Habría encontrado una respuesta entusiasta. En dicha conferencia se habría podido organizar un vasto plan de intervención y de solidaridad en cada país, con la creación de comités de apoyo al pueblo griego. Un Manifiesto de solidaridad activa con el pueblo griego redactado por Tsipras y Syriza se podría haber traducido en 24 horas a todas las lenguas europeas

para darle la máxima publicidad a través de las redes sociales, organizando proyecciones en las plazas públicas de las grandes ciudades de toda Europa, con vídeos que explicaran en detalle las medidas socialistas tomadas en Grecia.

Un gobierno revolucionario e internacionalista habría enviado a ministros, diputados, dirigentes sindicales y juveniles a todos los países europeos, y más allá, para hablar en mítines masivos en plazas, cines, teatros, facultades, locales sindicales, para explicar la experiencia griega hacia el socialismo, lo que habría encontrado una audiencia enorme.

Toda esta actividad habría dado un impulso formidable a las tendencias de izquierda anti-austeridad en cada país. Se hubiera generado un movimiento político poderosísimo en todo el continente contra todo intento de aislar a Grecia, expulsarla del euro, o someterla por hambre y sed. Habría acelerado el proceso general de toma de conciencia. Esto hubiera llevado a crisis políticas en la mayoría de los países europeos, conforme se desarrollaban

movimientos anti-austeridad poderosos, provocando crisis y divisiones en la socialdemocracia, incorporando a la lucha política a cientos de miles. Que existe este fermento de rebelión general, lo vemos en Gran Bretaña con el “fenómeno Corbyn”, o en EEUU con el fenómeno Bernie Sanders, por no hablar del Estado español.

Esta hubiera sido la mejor forma de propiciar el surgimiento y desarrollo de nuevos UNIDOS PODEMOS y SYRIZAS en condiciones de llegar en un tiempo relativamente breve a los gobiernos, para cambiar esa desfavorable correlación de fuerzas que señalan los compañeros del Plan B.

Socialismo internacional

El impacto de una Grecia socialista sería tremendo. Los trabajadores de España, Portugal e Italia responderían de inmediato, y pronto serían seguidos por los trabajadores de Irlanda, Francia, Gran Bretaña; y sí, de Alemania también. Se crearían las bases para el derrocamiento del capitalismo y el establecimiento de los Estados Unidos Socialistas de Europa.

Nuestra alternativa no es una vuelta a la moneda nacional en cada país, lo cual sería abogar por una estrecha concepción nacionalista. Aspiramos a una Europa unida con una moneda común, pero nuestra alternativa es la Europa de los Pueblos, bajo la forma de una Europa Unida Socialista, que combinaría sus ingentes recursos industriales y agrícolas, para planificarlos en interés de todos, lo que permitiría solucionar en poco tiempo los problemas fundamentales de la mayoría de la población.

Una Europa socialista sería un imán poderosísimo que tumbaría un régimen capitalista tras otro. Comenzando por Rusia, y siguiendo por el Norte de África y Medio Oriente, millones de trabajadores, campesinos, jóvenes, etc. se levantarían espontáneamente en cada país para sumarse a una federación socialista de los pueblos. Esta revolución atravesaría los mares y océanos, golpearía las puertas de América Latina y Asia. Sería una simple cuestión de tiempo que la ciudadela del capitalismo, los EEUU, viviera su propio proceso revolucionario, como ya anticipa el movimiento de millones generado alrededor de Bernie Sanders.

Venezuela. Última advertencia

Jorge Martín

Los ataques contra la revolución Bolivariana se han intensificado en las últimas semanas. Los problemas de escasez han llevado a casos de saqueo. La oposición de derechas está intentando activar un referéndum revocatorio presidencial, pero al mismo tiempo amenaza con acciones violentas ¿Qué está ocurriendo realmente en Venezuela y cómo se puede enfrentar esta amenaza?

El viernes 13 de mayo, el presidente de Venezuela, Maduro, extendió el “Decreto de Emergencia Económica” y decretó un Estado de Emergencia por 60 días que incluye amplios poderes para hacer frente a la amenaza militar exterior y a los problemas de producción y distribución de alimentos.

Como era de esperar, los medios de comunicación capitalistas de todo el mundo se unieron en un coro de denuncia, gritando históricamente contra la “dictadura”, mientras que uno de los principales líderes de la oposición de derecha, Capriles Radonski hizo un llamamiento público a desobedecer el decreto.

Se sienten envalentonados por el éxito de la suspensión de la presidente Dilma Rousseff en Brasil y quieren seguir el mismo camino en Venezuela tan pronto como sea posible, por cualquier medio necesario, legal o ilegal.

Una crisis muy seria Desde que Chávez fue elegido en 1998, y en particular desde las leyes habilitantes aprobadas en diciembre del 2001, la oligarquía de Venezuela y el imperialismo han participado en una campaña constante de acoso, violencia, desestabilización, golpes de estado, mentiras y calumnias.

En todas las ocasiones anteriores, la voluntad revolucionaria de las masas trabajadoras bolivarianas, los campesinos y los pobres, ha derrotado los intentos contrarrevolucionarios.

Durante diez años, la revolución aplicó amplias reformas y mejoró sustancialmente las condiciones de vida

de las masas. Se declaró que el objetivo de la revolución bolivariana era el socialismo, hubo una amplia variedad de experiencias de control obrero, se dieron ocupaciones de fábricas algunas de las cuales fueron expropiadas, se renacionalizaron empresas. Millones empezaron a participar activamente a todos los niveles en un intento de tomar el futuro en sus propias manos.

Por supuesto, este periodo fue ayudado por los altos precios del petróleo. El gobierno pudo utilizar una enorme cantidad de dinero de la renta petrolera para financiar programas sociales que beneficiaron a millones.

No se puede regular el capitalismo Se tomaron una serie de medidas que limitaban el funcionamiento normal de la economía capitalista de libre mercado con el fin de defender la revolución contra el sabotaje de la clase dominante. Se aplicaron controles de divisas para evitar la fuga de capitales, y controles de precios sobre los productos alimenticios de primera necesidad para defender el poder adquisitivo de las masas pobres.

Pero los capitalistas encontraron maneras de evitar estos controles, que dieron lugar a una transferencia masiva de divisas de la renta petrolera a los bolsillos de capitalistas sin escrúpulos. ¿Cómo ocurrió esto? El gobierno estableció un tipo de cambio subsidiado, que se iba a utilizar para importar productos básicos, así como maquinaria, componentes e insumos para la industria. En lugar de eso, los capitalistas privados solicitaban estos dólares subsidiados que luego desviaban al mercado negro para cambiarlos a un precio más alto, o directamente a sus cuentas en el extranjero.

Una situación similar se desarrolló con los controles de precios. El sector privado, que todavía tiene un control casi monopólico en el procesamiento y distribución de alimentos, se negó a producir productos con precios regulados. Por lo tanto, para eludir los pre-

cios regulados para el arroz, por ejemplo, empezaron a producir variedades saborizadas o colorizadas, no sometidas a regulación.

Esta huelga en la producción de los capitalistas recargó todo el peso de la importación y distribución de productos alimenticios básicos en el Estado. Los alimentos importados por el Estado del mercado mundial, pagados a precios internacionales con los dólares de la renta petrolera, son vendidos a precios muy subsidiados en las cadenas de supermercados estatales. Pero cuando los precios del petróleo entraron en caída libre y la economía entró en una profunda recesión, todo esto se vino abajo.

Para seguir pagando los programas sociales, incluidos los productos alimenticios subsidiados, el Estado comenzó a imprimir grandes cantidades de dinero sin respaldo alguno. Entre 1999 y 2015, la masa monetaria circulante aumentó en más del 15.000%.

La fuga masiva de capitales, el desarrollo de un enorme mercado negro de dólares, y la masiva expansión de la oferta monetaria en un momento de recesión económica causaron inevitablemente hiperinflación. En 2015, la inflación anual superó el 180%. Las reservas de divisas del país están bajo mínimos, 12.700 millones de dólares.

Esta grave situación ha llevado a una fuerte disminución de las importaciones de alimentos y otros productos básicos. Esto ha creado escasez permanente de productos básicos en las cadenas de supermercados estatales que los venden a precios regulados. A su vez, esto crea un enorme mercado negro de estos productos. El enorme diferencial creado entre los precios regulados (cada vez más escasos) y el mercado negro, desvía los productos hacia este último.

La conclusión es clara: el capitalismo no puede ser regulado. El intento ha dado lugar a una crisis económica a una escala masiva.

La respuesta del gobierno a estos problemas extremos ha sido hacer concesiones a los capitalistas con la esperanza de ganar su confianza para que colaboren en revertir la situación. Nada de esto ha funcionado.

El impacto en la conciencia

¿Qué ha cambiado desde los intentos anteriores de la contrarrevolución de derrotar al movimiento bolivariano? El estrés constante y la tensión de tener que hacer cola durante horas para conseguir productos básicos, la incertidumbre creada por la escasez y la hiperinflación, el hecho de que esta situación siga empeorando, la constatación de que mientras las masas están sufriendo hay algunos que se hacen llamar “bolivarianos” y están en cargos de poder que se están beneficiando enormemente de la corrupción, el cansancio por tener que luchar contra la burocracia dentro de su propio movimiento, etc.

Esta es la razón clave para entender la derrota en las elecciones a la Asamblea nacional del 6 de diciembre, que fueron ganadas por la oposición de derecha por primera vez en 18 años.

Esa derrota ha creado un bloqueo institucional. La actual Asamblea Nacional dominada por la derecha ha tratado de aprobar algunas leyes reaccionarias, pero han sido bloqueadas por el presidente o el Tribunal Supremo. Las iniciativas adoptadas por el presi-

dente se declaran fuera de orden por la Asamblea.

Actualmente la oposición está tratando de activar un referéndum revocatorio presidencial (una garantía democrática introducida por la revolución bolivariana). Si el presidente es removido dentro del 2016, entonces el presidente derechista de la Asamblea Nacional se haría cargo de la presidencia. Pero Maduro intentará por todos los medios retrasar el referéndum hasta el año 2017, porque si es removido en ese momento, sólo podría sustituirle su Vicepresidente para el resto de su mandato (hasta 2019).

¿Un golpe militar? La combinación del bloqueo institucional, una profunda crisis económica, y una situación de violencia en las calles que la oposición desea crear, también podrían impulsar a un sector del ejército a intervenir. Este es un momento muy peligroso para la revolución bolivariana. Una intervención militar, cualquiera sea la forma que tomara, sería el preludio de una “transición” para volver a tomar el control del poder del Estado por parte de la oligarquía.

Al tiempo que una capa de las masas está cansada y desgastada, también hay una capa de los activistas más avanzados que están muy enojados y que se radicalizaron como resultado de la derrota en las elecciones de diciembre. Hubo un movimiento desde

abajo para exigir la radicalización de la revolución.

Si la dirección bolivariana tomara medidas radicales y decisivas para abordar el problema de la escasez, esto volvería a encender una ola de entusiasmo revolucionario. Tales medidas serían: monopolio del comercio exterior; expropiación de la producción de alimentos y de la cadena de distribución bajo el control democrático de los trabajadores, las comunidades y los pequeños productores campesinos; impago de la deuda externa; expropiación de los bancos y las grandes empresas; un plan nacional y democrático de producción para satisfacer las necesidades de la mayoría.

Si la derecha lograra sus objetivos de recuperar el control del Estado por cualquier medio, Venezuela no volvería a una democracia capitalista “normal”. El programa de la clase dominante en un país plagado por una crisis económica y social masiva sería una guerra contra el pueblo trabajador. Irían a la ofensiva contra todas las conquistas sociales de la revolución. Ellos se enfrentarían a una fuerte resistencia por parte de las masas y, por tanto, tratarían de aplastar el movimiento por la fuerza.

El momento es de peligro extremo. Esto sólo se puede superar mediante medidas extremas y con firmeza. No más vacilaciones ¡Hay que llevar a la revolución hasta el final! □



Francia: La lucha contra la reforma laboral entra en una etapa decisiva

Se extienden las huelgas indefinidas en distintos sectores

Miguel Jiménez

El martes 10 de mayo, el primer ministro francés Manuel Valls se vio obligado a utilizar los poderes de emergencia para aprobar por decreto la odiada Ley de trabajo o Ley El Khomri, (El Khomri es el apellido de la ministra de trabajo) sin someterla al proceso reglamentario en el Congreso, ante el temor de una rebelión en las filas del grupo parlamentario socialista.

Obreos y estudiantes, unidos Esto no hizo sino radicalizar las protestas que hasta entonces estaban convocando los dirigentes confederales de los sindicatos de forma rutinaria. Trabajadores, junto con jóvenes estudiantes y participantes del movimiento de protesta de ocupaciones de plazas *Nuit Debout* (Noche de Pie) tomaron diferentes empresas y lugares gritando consignas bastante radicalizadas, como "Asamblea Nacional, Asamblea del Capital" o "La democracia real está aquí [en las calles]".

Los sindicatos y organizaciones estudiantiles llamaron a una nueva jornada nacional de lucha y a la huelga los días 12, 17 y 19 de mayo. Eso suponía una reiteración en la estrategia de los dirigentes sindicales, que había sido la de llamar a una sucesión interminable de "días de protestas" y huelgas de 24 horas, que se convocan sin ningún plan de acción posterior y que no logran otra cosa que desgastar el movimiento. Después de 7 días de jornadas de acción como éstas desde marzo, donde en cada jornada hubo centenares de miles de manifestantes, está claro que el gobierno no dará marcha atrás a menos que se enfrente a una acción mucho más fuerte.

Esta contrarreforma corresponde a las necesidades objetivas de la clase dominante francesa. Si se aprueba, los capitalistas podrán aumentar considerablemente la explotación sobre los trabajadores, reducir los salarios, no reconocer los convenios y despedir más fácilmente, acercando las relaciones laborales francesas a las españolas. Hay mucho en juego para las grandes empresas y no van a renunciar a ella fácilmente.

Los dirigentes sindicales son superados por su base Los dirigentes sindicales afirmaron que "no se descarta ningún tipo de iniciativa para las siguientes semanas, incluyendo una manifestación nacional", pero lo cierto es que han sido superados por el movimiento desde abajo.

Ya en el congreso de la CGT, convocado en mitad de las protestas, más del 40% de los delegados se mostraron a favor de que el principal sindicato del país convocase contra la Ley El Khomri una huelga "reconducible" (huelga indefinida, que es sometida a votación cada cierto tiempo en asambleas). Ante la falta de iniciativa de los dirigentes sindicales, en los sectores obreros con más tradición de lucha se aprobó empezar con las huelgas reconducibles, los primeros de todos los transportistas por carretera, los petroquímicos, portuarios y los ferroviarios. Estas federaciones obreras, sobre todo las de CGT, fueron algunas de las que convocaron huelgas indefinidas en el 2010 contra la reforma de pensiones de Sarkozy. Entonces, los dirigentes confederales se negaron a apoyar estas huelgas y a ampliarlas a otros sectores. Pero el mo-

vimiento se desarrolló en cierta medida por sí mismo hasta un cierto punto: surgieron "Asambleas Generales interprofesionales" en varias ciudades, reuniendo a sindicalistas de todas las empresas, trabajadores, jóvenes y desempleados. El embrión de una coor-

dinación nacional de estas Asambleas Generales había nacido.

El movimiento cayó en reflujo justo antes de que esta Coordinación Nacional pudiera realmente haber jugado un papel cuando los dirigentes firmaron un pacto que derogaba parte de la contrarreforma. Pero esta experiencia quedó en la memoria y puso de relieve la creatividad de los jóvenes y de los trabajadores, su capacidad para organizar la lucha sobre bases combativas y democráticas.

Muchos sindicalistas han recordado en los últimos meses la última gran movilización, discutiendo sobre ella, asimilando y amplificando la experiencia de la lucha del 2010. Yann Manneval, uno de los dirigentes locales del puerto de Marsella, declaró a la prensa provincial el objetivo que les mueve: "Ganar es perfectamente posible, a condición de amplificar y extender el movimiento, y mantenerlo".

Llegados a un punto, dirigentes regionales y de federaciones más combativos, reflejando la maduración y el cambio de conciencia de millares de delegados y sindicalistas, están dando el paso consciente de pasar por encima de las convocatorias estatales, llamando a hacer converger las huelgas reconducibles para hacer retroceder al gobierno. La dirección del sindicato en esta ocasión no se atreven a ir de frente contra "los rebeldes" y, en un momento dado, cuando las huelgas reconducibles son un hecho, los dirigentes confederales en sus declaraciones hacen mención a ellas, pero sin impulsarlas.

El resultado ha sido el de una creciente cascada de huelgas reconducibles en un sector tras otro de la economía:

- Huelga del servicio público (reconducible desde el 16 al 29 de mayo).
- Huelga de transporte por carretera (reconducible a partir de 16 de mayo).
- Huelga de la RATP (transportes metropolitanos de París).
- Huelga de marinos y puertos (reconducible a partir del 17 de mayo).
- Huelga de ferroviarios (reconducible a partir del 18 de mayo todos los miércoles y jueves, hasta el fin de la Eurocopa de fútbol, que se juega en Francia).
- Refinerías y petroquímica (en huelga reconducible desde el 17 de mayo).
- Huelga reconducible de los estudiantes de secundaria.

Correos, Aeropuertos, varias acerías, otras empresas y polígonos industriales ya votaron igualmente la huelga reconducible.

El 20 de mayo Caen, Le Havre o Burdeos estaban prácticamente paralizadas por los bloqueos de los trabajadores del transporte por carretera y otros colectivos en huelga. Seis de las ocho refinerías existentes en Francia estaban paralizadas, amenazando el suministro de hidrocarburos en las zonas más industrializadas. La huelga se extendía por los polígonos industriales de puertos como el de Nantes-Saint Nazaire, Rouen, Le Havre y Marsella.

El gobierno prohíbe manifestaciones. La lucha se radicaliza Desde el principio de las movilizaciones el gobierno intentó deslegitimarlas, empezando por las

manifestaciones de los jóvenes, con los que en algunas manifestaciones hubo batallas campales con la policía, fruto de la acción de pequeños grupos (en ocasiones, probablemente infiltrados por la policía).

Basándose en incidentes aislados, la respuesta del gobierno ya en marzo y abril fue la de mandar a la policía al conjunto de las manifestaciones juveniles en actitud provocadora, buscando desacreditar el conjunto de la movilización. El estado de ánimo entre los trabajadores, en particular a los jóvenes, es de mucha rabia. La aprobación de la ley por decreto no hizo sino encrespar los ánimos. El movimiento de *Nuit Debout* actuó en muchas ocasiones como lugar de coordinación entre jóvenes y trabajadores, que tomaron estaciones, vías de tren y centros comerciales en acciones a veces espectaculares. El gobierno, cada vez más acosado y a la defensiva, reaccionó prohibiendo manifestaciones, de jóvenes y de trabajadores por igual, como fue el caso en Nantes en la huelga del 19 de mayo. Christophe, ferroviario en la estación de Austelitz declaraba: "Tratan de desacreditarnos porque saben que podemos bloquear el país".

La consigna central del movimiento es la retirada de la Ley El Khomri. Pero para la juventud en particular se acompaña cada vez más de un cuestionamiento general del "sistema". El sindicato ferroviario de CGT ya ha llamado en su propaganda a "tumbar al gobierno". La victoria del movimiento en contra de la Ley El Khomri sólo será posible sobre la base de una amplificación de la huelga reconducible que implique a un mayor número de trabajadores.

Ya se han vuelto a restablecer, embrionariamente, Asambleas Generales de trabajadores que agrupan a varias empresas en diferentes ciudades y zonas industriales del país. La movilización de la juventud y los desempleados a través de *Nuit Debout* es ahora más decidida y amplia que en el 2010. Más del 70% de la población está en contra de la ley y los socialistas en el poder están divididos. El gobierno podría caer y sería perfectamente posible, y todo esto debe contribuir al resurgimiento político de una alternativa radical y anticapitalista a la izquierda del Partido Socialista.



¡Únete a la Corriente Marxista Internacional!

Vivimos en una época de profundo cambio histórico. El sistema capitalista atraviesa la crisis más profunda y prolongada que se recuerde, dejando un legado de desempleo de masas, retrocesos sociales, empleos precarios, pobreza, desastres medioambientales y guerras regionales que se suceden sin interrupción.

La crisis expresa la incapacidad de conciliar los ingentes recursos naturales, productivos y culturales de que dispone la humanidad con el control que ejercen sobre los mismos un puñado de grandes monopolios, multinacionales y bancos. Éstos, usan y abusan de su propiedad para mantener beneficios y privilegios insultantes a costa de convertir en una pesadilla la vida de millones de personas en todo el planeta.

El 80% de la humanidad vive en condiciones de pobreza y miseria crecientes. En el polo opuesto, las 62 personas más ricas del planeta poseen tanta riqueza como 3.600 millones de seres humanos o la mitad de la población mundial! En el Estado español, 20 individuos acumulan tanta riqueza como 14 millones. Esta es una contradicción absurda y criminal.

La crisis que nos ha azotado en los últimos 8 años ha dado lugar a incesantes movilizaciones y protestas de masas. Pero la lucha social por sí misma ha demostrado ser insuficiente para cambiar el estado de cosas. La profunda crisis económica deja muy escaso margen para detener los ataques o mantener las viejas conquistas. Por eso se ha abierto paso la idea de que debe ser el pueblo quien debe tomar el poder político y económico en sus manos.

Este mal llamado "sistema de libre mercado" debe dar paso a un sistema de producción y reparto basado en la cooperación y el bien común. El mundo al que aspiramos, basado en la igualdad, la justicia y los derechos sociales, es el Socialismo. Eso requiere colectivizar las palancas fundamentales de la economía: las grandes empresas, bancos y latifundios, bajo la administración democrática de los trabajadores.

Existen las condiciones objetivas para un mundo socialista. La tecnología, la productividad, el conocimiento y las materias primas están presentes para una reorganización radical de la sociedad. Mediante la combinación de los recursos mundiales en un plan racional y democrático de producción, distribución e intercambio, en armonía con el medio ambiente, podemos alimentar, vestir, alojar, educar y proporcionar atención médica de alta calidad para todos en el planeta.

La Corriente Marxista Internacional está presente en más de 30 países de todo el mundo. Su tarea es aportar claridad ideológica al movimiento para ayudar a hacer consciente a la clase trabajadora y a la juventud los objetivos últimos que se desprenden de sus luchas, aspiraciones e intereses, para transformar la sociedad y establecer una sociedad socialista democrática.

La Corriente Lucha de Clases es la sección en el Estado español de la Corriente Marxista Internacional, y está abierta a la participación de toda persona interesada en la lucha por un mundo justo y humano, un mundo socialista. Si te sientes identificado con nuestros planteamientos, únete a nosotros para luchar por un futuro socialista en el Estado español y a nivel internacional.

NUESTRO PROGRAMA:

- Empleo digno para todos. A Igual trabajo, igual salario. No al empleo precario, fijo en plantilla a los 15 días.
- Repartir el trabajo para trabajar todos. Semana laboral de 35 horas sin reducción salarial.
- Salario mínimo de 1.000 euros.
- Subsidio de desempleo para todos los parados, igual al Salario mínimo.
- Derogar las reformas laborales de PP y PSOE, y de toda la legislación reaccionaria del PP.
- Nacionalizar sin indemnización toda empresa que despida trabajadores o cierre.
- No pagar la deuda.
- Revertir todos los ajustes y recortes sociales.
- Paralizar los desahucios. Expropiar sin pago las viviendas vacías de bancos e inmobiliarias para alquiler social (máximo 10% de los ingresos familiares)
- Nacionalización sin indemnización, salvo a pequeños accionistas y ahorradores, de la Banca, los Monopolios y los Latifundios, bajo control obrero.
- Derecho de autodeterminación para Catalunya, Euskadi y Galicia. Por la unión voluntaria de los pueblos ibéricos.
- Depurar el aparato del Estado de fascistas y reaccionarios.
- Completa separación de la Iglesia del Estado.
- No a la monarquía. República Socialista Federal. Por los Estados unidos socialistas de Europa.

www.luchadeclasses.org • contacto@luchadeclasses.org